



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

JAIME ALMENAR BELENGUER, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión nº 10/06 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 16 de marzo de 2006 se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el que se aprueba la

CONTESTACIÓN A LA CONSULTA PLANTEADA POR WORLD PREMIUM RATES, S.A., SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS PRECIOS DEL SERVICIO DE CONSULTA TELEFÓNICA SOBRE NÚMEROS DE ABONADO (RO 2006/163).

I.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA CONSULTA.

Primero.- Con fecha 25 de enero de 2006 tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito presentado por D. José Chicherón Mota en nombre y representación de WORLD PREMIUM RATES, S.A., (en adelante, WPR) mediante el cual formula consulta sobre determinados aspectos relacionados con los precios tanto del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado como del de la locución informativa sobre los mismos.

En dicho escrito WPR solicita se le aclaren determinadas cuestiones en relación con *“la aplicación de los derechos y las obligaciones que para los operadores de acceso y los prestadores del servicio de consulta telefónica establece la Resolución relativa al expediente RO 2003/1049, aprobada por Acuerdo del Consejo de la Comisión de fecha 23 de Octubre de 2003”*.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

De un lado, la consulta se formula sobre los siguientes aspectos relacionados con el precio de la locución informativa sobre los precios del servicio de consulta:

- Capacidad de WPR para establecer y conocer el precio que los operadores de acceso cobran por las llamadas al 11872, número a través del que presta el servicio, durante la locución informativa.
- Herramientas de las que dispone para asegurar que efectivamente el precio que los operadores cobran por las llamadas durante la locución es el notificado y garantías para que el mismo no se modifique posteriormente.
- Obligación de los operadores de acceso para facilitar dicha información.
- Responsabilidad derivada para WPR y para los operadores de acceso en caso de incumplimiento de los precios establecidos.
- Si puede obligarse a todos los operadores de acceso a que durante la locución se cobre al llamante el precio equivalente al coste de acceso en la red del operador, siempre que éste sea menor que el precio recogido en la regulación del año 2003.

Por otro, en relación con el precio del servicio de consulta se someten a consulta los siguientes extremos:

- Capacidad de WPR para establecer el precio que los operadores de acceso cobran por las llamadas al 11872 durante toda la llamada.
- Si podría WPR obligar a todos los operadores de acceso a que se cobre al llamante el precio equivalente al coste de acceso en la red de cada operador, más el precio de interconexión del 11872 establecido por WPR.
- Si, para el caso de que el operador de acceso sea un operador dominante en el mercado de interconexión o en el mercado de servicios mediante los que se acceda al 11872, tendría derecho WPR a que los precios descritos en los párrafos anteriores se calculasen con el precio de interconexión de terminación en las citadas redes.

Con fecha 15 de febrero de 2006 tuvo entrada en el Registro de esta Comisión nuevo escrito de WPR en el que pone de manifiesto que se había recibido respuesta de Telefónica de España, S.A.U (en adelante, Telefónica) al burofax que le había remitido WPR solicitándole que se le informe del precio que se tarifica a los abonados llamantes desde la red fija de Telefónica por las llamadas al número 11872, titularidad de WPR. Telefónica pone de manifiesto en su escrito que *“la facturación al abonado llamante se está realizando de acuerdo con los parámetros que indican en su carta, aplicándose a sus usuarios la tarificación de usuario solicitada por “BT España” que es su operador de servicio”*.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El objeto de la presente Resolución es, por tanto, dar respuesta a las cuestiones planteadas por WPR en su escrito de 25 de enero de 2006.

II. HABILITACIÓN COMPETENCIAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (en adelante LGTel), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tiene por objeto *“el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales, conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la resolución de los conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las controversias entre los mismos”*. Para el cumplimiento de este objeto, la Ley atribuye a esta Comisión determinadas funciones, además de cualesquiera otras que legal o reglamentariamente se le atribuyan o le encomienden el Gobierno o el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Concretamente, el artículo 29.2, letra a), del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre (en adelante Reglamento de la Comisión), establece que es función de esta Comisión *“la resolución de las consultas que puedan formularle los operadores de redes y servicios de telecomunicación y las asociaciones de consumidores y usuarios de estos servicios”*.

Con carácter general, y conforme a lo señalado por esta Comisión en distintos acuerdos contestando consultas que le han sido planteadas, ha de entenderse que las consultas a las que se refiere el artículo 29.2 a) del Reglamento de la Comisión pueden referirse a los siguientes ámbitos:

- Las normas que han de ser aplicadas por la Comisión,
- Los actos y disposiciones dictados por la Comisión, y
- Las situaciones y relaciones jurídicas sobre las cuales ha de ejercer sus competencias la Comisión.

La consulta planteada por WPR se refiere a determinados aspectos relativos tanto a los precios de la locución informativa del servicio de consulta telefónica como del servicio de consulta propiamente dicho, ambas cuestiones recogidas en la normativa sectorial aplicable sobre la materia, esto es, en la Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado (en



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

adelante OM de servicio de consulta)¹, así como en la Resolución aprobada por Acuerdo del Consejo de esta Comisión de 23 de octubre de 2003, por la que se modifican los títulos de asignación de numeración del rango 118AB incluyendo la obligación de informar sobre la identidad de los prestadores y los precios de los servicios.

Se formula, por tanto, al amparo del artículo 29.2 del Reglamento de la Comisión, por tratarse de disposiciones cuya aplicación corresponde a esta Comisión, conforme a las competencias que le son atribuidas por las leyes.

III. SOBRE LA OBLIGACIÓN DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE CONSULTA TELEFÓNICA SOBRE NÚMEROS DE ABONADO DE PROPORCIONAR UNA LOCUCIÓN INFORMATIVA DEL PRECIO DEL SERVICIO Y EL PRECIO A COBRAR POR LA MISMA.

La consulta planteada se refiere, en primer término, al precio de la locución informativa del precio del servicio de consulta sobre números de abonado que se tiene que proporcionar a los usuarios en todas las llamadas que realicen a los números de información telefónica sobre números de abonado. Al respecto se plantean diversas cuestiones relativas a la entidad habilitada para establecer el precio de la locución, la posibilidad de conocer el precio facturado al usuario final y las garantías de cumplimiento del precio fijado, así como la responsabilidad de los proveedores del servicio de consulta.

1. Sobre la fijación del precio de la locución.

La obligación de facilitar una locución informativa se recogió inicialmente en la OM de Servicios de Consulta, que establece las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado, cuyo apartado 9.4 preveía que los prestadores del servicio de consulta telefónica debían *"proporcionar a sus usuarios la posibilidad de solicitar en línea una locución telefónica informativa sobre el precio del servicio"*².

De conformidad con la disposición anterior, y ante la constatación de que no todos los operadores que prestaban el servicio de consulta telefónica sobre

¹ Esta norma sigue vigente de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios.

² Redacción anterior a la modificación de la OM de Servicios de Consulta realizada por la Orden PRE/2410/2004, de 20 de julio.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

números de abonado cumplían correctamente su obligación de informar, con carácter previo a la prestación de sus servicios, sobre los precios de éstos, esta Comisión adoptó la Resolución de 23 de octubre de 2003, por la que se modificaron los títulos de asignación de numeración del rango 118AB, incorporando la obligación del operador prestador del servicio de consulta telefónica de *“informar al usuario llamante de su identidad y del precio de los servicios que ofrezca a través del número del rango 118AB. [...] Esta información podrá ser ofrecida de modo que sea el propio usuario quien decida si desea o no recibirla o, en su defecto, deberá consistir en una locución automática que se emitirá en todas las llamadas”*.

Asimismo, la mencionada Resolución estableció en su apartado 4 los criterios bajo los que dicha locución se tendría que facilitar, en concreto, el contenido, el precio al que puede ofrecerse (no podrá ser superior al de una llamada metropolitana cuando sea en red fija, o de una llamada de móvil a fijo cuando la llamada se realice desde una red móvil) y la duración de la misma (establecida en 15 segundos de duración y 5 segundos de espera adicionales).

Con posterioridad a la adopción de la citada Resolución, se aprobó por el Ministerio de la Presidencia la Orden PRE/2410/2004, de 20 de julio, cuyo apartado segundo modificaba el apartado 9.4 de la OM de servicios de consulta con el objeto de que *“en todos los casos, se informe a los usuarios del precio de dicho servicio, así como de la identidad de los proveedores a través de una locución informativa previa, no pudiéndose facturar dicho servicio hasta que transcurra el tiempo fijado para dicha locución”*.

Es decir, esta modificación viene a precisar, en el mismo sentido que fue recogida en la Resolución de la Comisión, la obligación del prestador de servicio de consulta de facilitar una locución. Si bien modifica la duración inicialmente establecida por la Resolución de la Comisión (la reduce de 15 a 8 segundos), y establece la prohibición de aplicar al usuario llamante el precio del servicio de consulta sobre números de abonado hasta que le sea suministrada la citada locución, y transcurrido un periodo total de 11 segundos (el lapso de espera se reduce de 5 a 3 segundos).

A pesar de que dicha modificación concretaba determinados aspectos sobre la obligación de facilitar la locución, nada se recoge sobre el precio que habrá de facturarse por la misma al usuario final. La única condición que impone al proveedor del servicio es la imposibilidad, en todo caso, de cobrar el precio del servicio de consulta hasta transcurrido un lapso de 3 segundos desde la finalización de la locución.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Es por ello que debe entenderse que sigue vigente lo previsto al respecto en la Resolución de la Comisión de 23 de octubre de 2003 y, en particular, lo establecido en el apartado 4.a) relativo al *precio al que puede ofrecerse la locución para el usuario final*, según el cual:

“A elección del operador que presta el servicio de consulta, [la locución] podrá ser gratuita para el usuario o tarificable. Cuando el operador opte por tarificar la locución, el precio no podrá ser superior al de una llamada metropolitana cuando la llamada tenga su origen en una red fija, o de una llamada de móvil a fijo cuando la llamada se realice desde una red móvil, en ambos casos en la franja horaria en la que se realice la llamada”.

La decisión sobre el carácter gratuito o tarificable de la locución informativa corresponde, en cualquier caso, al prestador del servicio de consulta. Así se desprende de la propia OM de Servicios de Consulta cuyo apartado 9.2 afirma que *“los proveedores del servicio [...] fijarán libremente los precios que se vayan a cobrar a los abonados de los operadores del servicio telefónico disponible al público con los que tengan acuerdos de acceso especial a sus redes, en función de las posibilidades técnicas”.*

Según se estableció en la mencionada Resolución de 23 de octubre, *“teniendo en cuenta que la locución que se ofrece al usuario informando de los precios del servicio forma parte del mismo, es lógico que sea el propio operador asignatario de la numeración del rango 118AB el que decida a qué precio ofrece la locución informativa dentro de los límites a los que nos hemos referido más arriba”.*

En vista de lo anterior, cabe afirmar que es WPR quien ha de establecer el precio que los operadores de acceso cobrarán durante la locución informativa por las llamadas al 11872, a través del cual dicho operador presta el Servicio de Consulta telefónica, siempre en los términos previstos en la OM de servicios de consulta así como en la Resolución de la Comisión de 23 de marzo de 2003, referidos con anterioridad.

En relación a esta misma cuestión, plantea WPR en su escrito de consulta si puede obligar a todos los operadores de acceso a que durante la locución *“se cobre al llamante el precio equivalente al coste de acceso en la red del operador, siempre que éste sea menor que el precio recogido en la regulación del año 2003”.*

Tal y como se ha afirmado, es WPR quien determinará los precios de la locución pudiendo establecer el precio que estime oportuno, siempre que el mismo respete los límites fijados en la citada Resolución. Es decir, podrá ser como máximo el precio de una llamada metropolitana o una llamada de móvil a



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

fijo, respectivamente según la llamada tenga su origen en redes fijas o móviles. Por lo tanto, para poder fijar un precio como el referido en el escrito de consulta, el coste de acceso a la red del operador al que se refiere WPR deberá ser, en todo caso, inferior al de una llamada metropolitana.

Téngase en cuenta, asimismo, la previsión contenida en la Resolución de 23 de octubre en la que se señala que la determinación de uno u otro precio por la locución *“en nada afecta a los pagos que hayan de realizarse en interconexión por el servicio prestado por los operadores de acceso al operador que presta el servicio de consulta”*, quien *“habrá de pagar el precio que corresponda por los servicios de acceso y facturación y gestión de cobro que le sean proporcionados por el operador de acceso”*. Es decir, en el supuesto de que se opte por facilitar la locución bien con un precio inferior a su coste, o bien con carácter gratuito será el propio proveedor de servicios de consulta quien deberá asumir dicho coste.

2. Sobre la posibilidad de conocer el precio facturado al usuario final. Garantías de cumplimiento del precio fijado.

Por otra parte, WPR plantea en su escrito determinadas cuestiones relativas a la posibilidad del prestador de servicio de consulta de conocer el precio que los operadores de acceso cobran durante la locución informativa, las herramientas de las que dispone para asegurar que efectivamente el precio que cobran es el notificado y la obligación del operador de acceso de facilitar dicha información.

Para dar contestación a estas cuestiones resulta preciso realizar las siguientes aclaraciones respecto al régimen de acceso e interconexión que, conforme a la normativa vigente y Resoluciones de esta Comisión, resulta aplicable a los servicios de consulta.

Establece la OM de Servicios de Consulta en su apartado Octavo que *“los titulares de redes públicas telefónicas que tengan la consideración de dominantes deberán atender las solicitudes técnicamente viables y debidamente justificadas (...) de acceso especial a sus redes”* por parte de los proveedores de servicios de consulta.

Dos son las alternativas que se le ofrecen al proveedor de servicios de consulta, y que fueron detalladamente analizadas en la Resolución de esta Comisión de 6 de marzo de 2003, con ocasión de la adopción de medidas cautelares tendentes a hacer efectiva la prestación de los servicios de consulta telefónica de CONDUIT EUROPE, S.A. De un lado, el proveedor de servicios de consulta podrá prestar el servicio a través de un acceso especial contratado



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

con Telefónica, en tanto que operador obligado por la Orden. De otro, la prestación del servicio podrá realizarse mediante la contratación de un acceso especial con un operador alternativo.

En este último caso, y para que el servicio de consulta pueda prestarse también a los abonados de acceso de Telefónica, el operador alternativo con quien se acuerde el acceso especial deberá estar interconectado a la red de Telefónica de modo que dicha operadora curse la llamada hasta la red del operador alternativo, que es quien se encarga de su entrega al operador que presta los servicios de consulta. Nos encontraríamos así con dos servicios diferenciados: un servicio de interconexión (entre el operador de acceso especial y Telefónica) que habría de prestarse en las condiciones establecidas en la OIR y un servicio de acceso especial que se prestará en las condiciones que en cada caso se pacten con el proveedor de servicio de consulta.

Pues bien, lo anteriormente expuesto aplicaría al caso planteado por WPR, puesto que nos encontramos ante la segunda de las alternativas. Según le consta a esta Comisión, WPR presta sus servicios a través de la red de BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A.U. (en adelante, BT) con quien tiene firmado *Acuerdo de recepción y entrega de llamadas, soporte de red para la prestación de servicios de consulta telefónica mediante número 11872*. Entre los servicios a suministrar por BT en el marco de dicho acuerdo se encuentran la recogida y encaminamiento de las llamadas realizadas al 11872, así como el soporte de infraestructura de interconexión con Telefónica S.A.U, e interconexión con redes de terceros operadores fijos y móviles (Cláusula tercera, apartado segundo del Acuerdo).

Es en este contexto en el que se plantea la consulta relativa la capacidad de WPR de conocer el precio que los operadores de acceso cobran por las llamadas al 11872.

La Resolución de 6 de marzo estableció que el servicio de consulta “se prestará en las mismas condiciones en las que se viene prestando el servicio de interconexión a los servicios de red inteligente desde la red de Telefónica en su modalidad de acceso”. Esto es, el precio que Telefónica cobre a los usuarios de los servicios de consulta será el establecido por el operador que presta dicho servicio. Así, la cantidad cobrada a los usuarios por Telefónica pasará íntegramente al operador interconectado detrayendo la remuneración por la prestación de los servicios de acceso (en función del nivel de interconexión que corresponda) y facturación y gestión y cobro.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Bien es verdad que lo anterior se refiere al precio del servicio propiamente dicho, si bien WPR se refiere en su consulta al precio de la locución. No obstante, lo que aplica a uno aplica a otro, puesto que, como ya se ha mencionado con anterioridad, *“la locución que se ofrece al usuario informando de los precios del servicio forma parte del mismo”*.

En vista de lo anterior, puede concluirse que será WPR quien determinará el precio de la locución, que habrá de respetar en todo caso los límites establecidos en la Resolución de 23 de marzo de 2003, precio que comunicará a su operador de acceso especial (en el presente caso BT) quien, a su vez, deberá comunicarlo a Telefónica para que éste lo cobre a los usuarios del servicio de consulta prestado por WPR que accedan desde su red.

En cuanto a las herramientas que se ofrecen para garantizar el debido cumplimiento de lo acordado, la OM de Servicios de Consulta prevé que *“los conflictos que se produzcan en relación con los acuerdos de acceso especiales entre los proveedores de servicio de consulta y los operadores de redes públicas telefónicas se resolverán por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general sobre accesos especiales e interconexión”*.

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad que le asiste de recurrir a la jurisdicción civil, ante aquellos incumplimientos que no sean susceptibles de su sometimiento a conflicto por referirse a cuestiones que formen parte de las relaciones jurídico privadas entre los operadores.

De esta forma, en el hipotético caso de un incumplimiento de las condiciones pactadas en el acuerdo de acceso especial podría WPR plantear conflicto con su operador de acceso, siempre en los términos referidos con anterioridad.

3. Responsabilidad de los proveedores del servicio de consulta

Plantea una última cuestión WPR sobre el precio de la locución referente a *“la responsabilidad derivada para WPR y para los operadores de acceso en caso de incumplimiento de los precios establecidos”*.

A este respecto caber afirmar que el cumplimiento de las obligaciones y condiciones derivadas de la prestación de servicios de consulta corresponde, en todo caso, a los propios operadores prestadores de estos servicios y, por lo tanto, también es su responsabilidad los incumplimientos que de las mismas se deriven. (Artículos 8 de la LGTel, 17 del Reglamento de Servicio Universal, y



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Orden CTE/711/2002 cuyo objeto es, precisamente, el establecimiento de las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica).

En relación con los operadores de acceso, ha de señalarse que las posibles responsabilidades que se deriven quedarán sujetas a los términos de los Acuerdos de acceso e interconexión firmados entre los operadores y que rijan las relaciones entre ellos.

IV. SOBRE LA CAPACIDAD PARA ESTABLECER EL PRECIO DEL SERVICIO DE CONSULTA.

En relación con el precio aplicable a los servicios de consulta, WPR plantea la posibilidad de que el mismo sea *“equivalente al coste de acceso en la red de cada operador, más el precio de interconexión del 11872 establecido por WPR”*, así como, si *“en el caso de que el operador sea un operador dominante en el mercado de interconexión o en el mercado mediante el cual se acceda al 11872”* tendría derecho WPR a que *“los precios descritos se calculasen con el precio de interconexión de terminación en la citadas redes”*.

El planteamiento de esta cuestión pone de manifiesto la confusión existente en el escrito de consulta en lo que se refiere a precios a usuario final, y precios de acceso e interconexión.

Según la OM de Servicios de Consulta *“los proveedores del servicio (...) fijarán libremente los precios que se vayan a cobrar a los abonados de los operadores del servicio telefónico disponible al público con los que tengan acuerdos de acceso especial a sus redes, en función de las posibilidades técnicas de estos”*.

Por lo tanto, se predica la libertad de fijar los precios a favor del prestador de los servicios de consulta. Nótese que la Orden referida tenía por objeto la apertura a la competencia de dicho mercado mercado, siendo de vital importancia en todo mercado liberalizado la competencia en precios.

Cuestión distinta son las obligaciones que en materia de acceso e interconexión se imponen a los operadores con peso significativo en el mercado y que, en todo caso, afectan a los precios mayoristas que deberán aplicar dichos operadores por tales servicios, pero que en nada condicionan el precio final que el proveedor de servicios de consulta cobre al usuario de sus servicios, precio que como ya se ha dicho fijará libremente el proveedor.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Si lo que está planteando WPR es la posible aplicación de precios diferentes para la prestación del servicio de consulta a través de un mismo número, esta Comisión se ha pronunciado al respecto en la Resolución de 29 de mayo de 2003 mediante la que se daba contestación a la consulta formulada por la entidad “11888 SERVICIO DE CONSULTA TELEFÓNICA, S.A.U” en relación con determinados aspectos de la Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se concluía que *“el derecho a la libre fijación de precios queda supeditada en todos los casos a las posibilidades técnicas de los operadores con los que el operador prestador del servicio hubiera llegado a un acuerdo para permitir el acceso de las llamadas desde las redes de acceso de éstos a los centros de atención de llamadas”*. Si bien, se precisaba que sólo los operadores de redes públicas que tengan la consideración de dominantes deberán incluir en las ofertas de acceso especial a sus redes un servicio de facturación y cobro de los precios que los proveedores del servicio de consulta hayan establecido para sus usuarios (apartado Noveno.3 de la OM de Servicios de Consulta).

V. CONCLUSIONES.

En relación con las cuestiones objeto de la presente consulta, lo expuesto en los apartados anteriores permite concluir lo siguiente:

1. Es WPR quien ha de establecer el precio que los operadores de acceso cobrarán durante la locución informativa por las llamadas al 11872, a través del cual dicho operador presta el Servicio de Consulta telefónica, siempre en los términos previstos en la OM de servicios de consulta así como en la Resolución de la Comisión de 23 de marzo de 2003
2. Debe entenderse que sigue vigente lo previsto respecto al precio de la locución en la Resolución de la Comisión de 23 de octubre de 2003 (en particular, lo establecido en el apartado 4.a)), según el cual la locución podrá ser gratuita para el usuario o tarificable. Cuando el operador opte por tarificar la locución, el precio no podrá ser superior al de una llamada metropolitana cuando la llamada tenga su origen en una red fija, o de una llamada de móvil a fijo cuando la llamada se realice desde una red móvil, en ambos casos en la franja horaria en la que se realice la llamada.
3. Será WPR quien comunicará el precio establecido por la locución a su operador de acceso especial, quien, a su vez, deberá comunicarlo a Telefónica para que éste lo cobre a los usuarios del servicio de consulta prestado por WPR que accedan desde su red.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

4. Para garantizar el debido cumplimiento de lo acordado, la OM de servicios de consulta prevé la posibilidad de someter a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones los conflictos que se produzcan en relación con los acuerdos de acceso especiales entre los proveedores de servicio de consulta y los operadores de redes públicas telefónicas. Ello sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a la jurisdicción civil, ante aquellos incumplimientos que no sean susceptibles de su sometimiento a conflicto por referirse a cuestiones que formen parte de las relaciones jurídico privadas entre los operadores.
5. El cumplimiento de las obligaciones y condiciones derivadas de la prestación de servicios de consulta corresponde, en todo caso, a los propios operadores prestadores de estos servicios y, por lo tanto, también es su responsabilidad los incumplimientos que de las mismas se deriven. Las responsabilidades de los operadores de acceso serán las que se deriven en cada caso de los términos de los Acuerdos acceso e interconexión suscritos entre los operadores y que rijan las relaciones entre ellos.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la Sesión correspondiente.

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

Jaime Almenar Belenguer

Reinaldo Rodríguez Illera